

LA GUERRA VA A LA ESCUELA

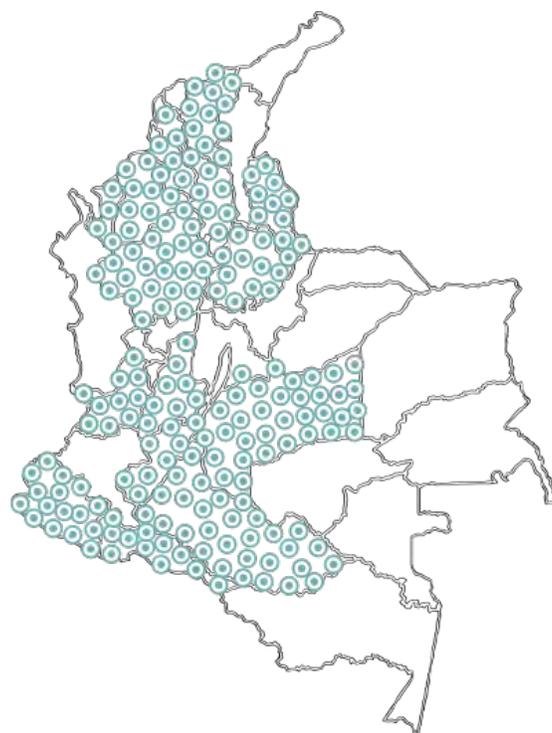


CONTEXTO

Entre el primero de enero de 1984 y el primero de diciembre de 2015 se cuentan, aproximadamente, 1.901.011 personas que vivieron un hecho victimizante cuando se encontraban en edad escolar, es decir, entre los 6 y los 17 años. Según información de la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, del número expuesto, 4.737 menores debieron distanciarse de las aulas porque fueron reclutados en las filas de grupos al margen de la ley; sin embargo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reporta que entre 1999 y 2015 atendió a 5.850 menores víctimas del mismo flagelo.

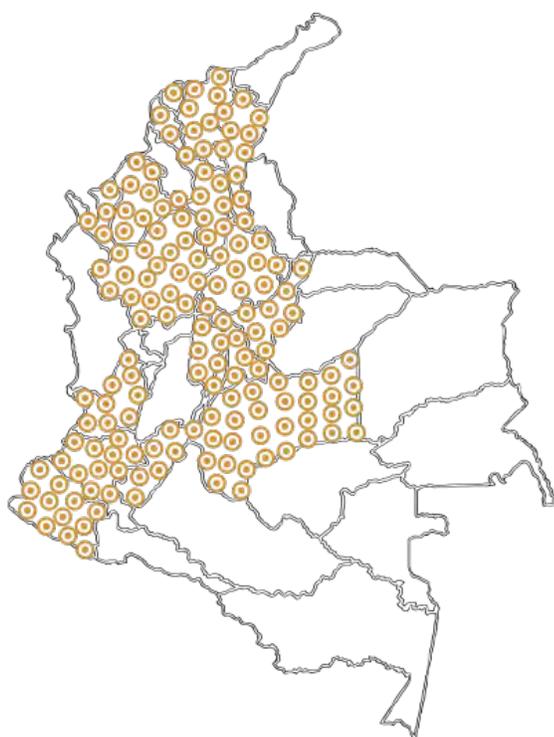
El paso de la guerra por la escuela también deja maestros desaparecidos, desplazados, exiliados, amenazados

y asesinados. Escuelas afectadas en su estructura por el impacto de balas y elementos explosivos; minadas y tomadas como trincheras durante combates o como lugares de campamento por grupos armados legales e ilegales. Y, de cara a toda esta escena, familias de zonas rurales que han decidido que sus hijos no recorran el camino a las aulas para evitar que sus nombres sean fijados en las listas de víctimas. Los siguientes mapas permiten visualizar los departamentos que registran en 2015 altas tasas de matrículas oficiales de desplazados, hijos de desmovilizados y víctimas de minas anti-personal. La información es resultado del análisis de datos que presenta el Ministerio de Educación Nacional.

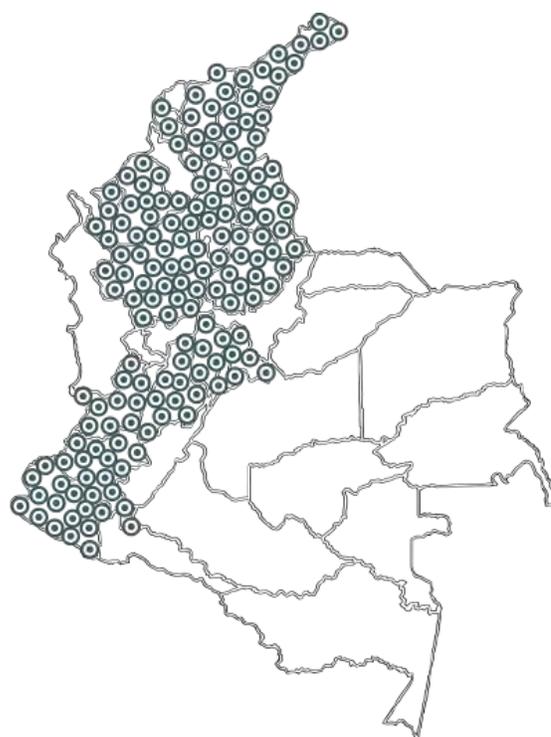


- Desplazados
- Hijos de desmovilizados
- Víctimas de minas antipersonal

Antioquia-Bolívar-Caquetá-Córdoba-Huila-Magdalena-Meta
 Nariño-Norte de Santander-Putumayo-Santander-Sucre
 Tolima-Valle del Cauca



Antioquia-Atlántico-Bolívar-Boyaca-Cauca-Cesar
 Córdoba-Cundinamarca-Huila-Magdalena-Meta
 Nariño-Santander-Valle del Cauca

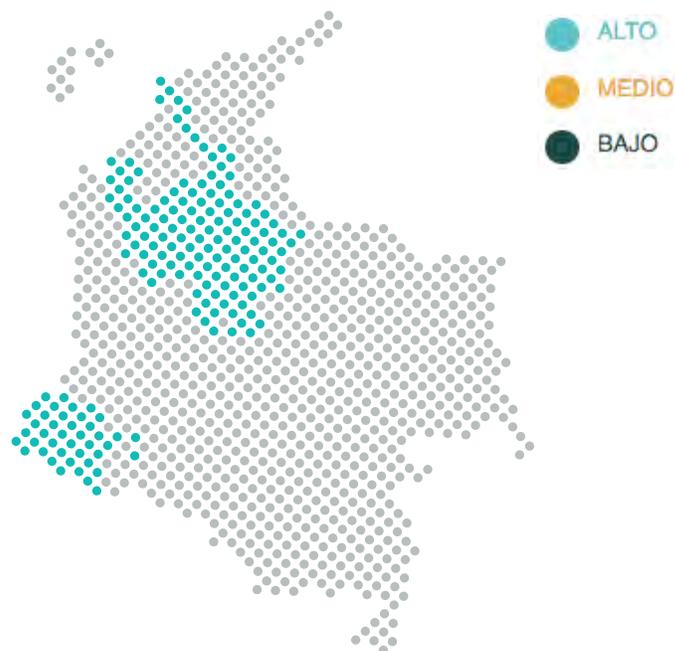


Antioquia-Bolívar-Cauca-Cesar-Córdoba
 Cundinamarca-La Guajira-Magdalena
 Norte de Santander-Nariño
 Santander-Tolima-Valle del Cauca

Educación para las víctimas

Finaliza el tercer lustro del siglo XXI y el país aún no cuenta con una cobertura total en educación. Las zonas rurales siguen siendo las más afectadas por cuenta, sobre todo, de la fuerte presencia de grupos armados ilegales y la ausencia parcial o total del Estado. Y en las zonas urbanas se detecta la necesidad del componente educativo para las víctimas que llegan huyendo de la guerra. En los siguientes mapas se exponen los lugares del país en los que se precisa de mayor oferta escolar para las víctimas. La información se toma del documento público Lineamientos para la regionalización de proyectos de inversión nacional dirigidos a la atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado. DNP.

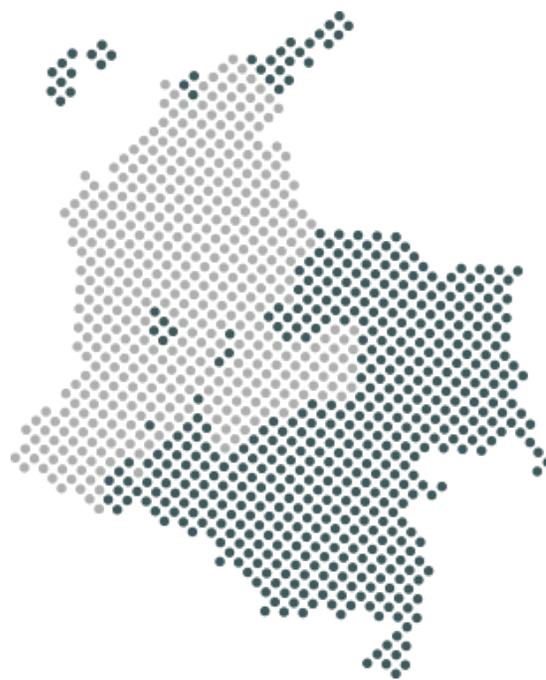
Esta clasificación define tres categorías que son alto, medio y bajo. Alto representa la mayor necesidad del componente educación para las víctimas, seguido por las otras dos categorías.



Antioquia-Bolívar-Boyacá-Cundinamarca
Nariño-Santander



Caldas-Cauca-Cesar-Chocó-Córdoba-Huila-Meta
Sucre-Tolima-Magdalena-Norte de Santander
Valle del Cauca



Amazonas-Arauca-Atlántico-Bogotá-Caquetá
Casanare-Guainía-Guaviare-La Guajira-Quindío
Putumayo-Risaralda-Vaupés-Vichada

“Cada sociedad es el resultado, en cierto sentido, de un modelo educativo”:

IVÁN CEPEDA

La educación es un tema tímido dentro de la agenda del proceso de paz que se desarrolla en Cuba. No obstante, en un escenario de postconflicto deberá ser un tópico fundamental. Iván Cepeda, Copresidente de la Comisión de paz del Senado de la República, reflexiona sobre el tema en la siguiente entrevista.

¿La Comisión de Paz del Senado de la República ha considerado el impacto del conflicto armado en la educación?

Yo llamo la atención sobre una exigencia que ha hecho la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, quienes han hablado de esa relación entre guerra y educación, lo que lleva a pensar que es necesario que aquí se produzca una transformación radical. Es importante que volquemos muchos recursos y potencialidades hacia la educación. Si uno observa las estadísticas, lo que dicen es que de cada diez víctimas, seis son personas de origen rural. Regularmente campesinos y campesinas a quienes se les ha negado el derecho a la educación. En la gran mayoría de los casos son personas que han sido desplazadas una y otra vez. Eso lleva a pensar en la pobreza, en la falta de recursos económicos y la dificultad para acceder a sistemas formales de empleo, de salud, y, por supuesto, de educación.

Si es claro que uno de los derechos vulnerados a las víctimas del conflicto armado es el acceso a la educación, ¿cuál es su opinión frente al presupuesto asignado a este sector en Colombia?

Una sociedad para la paz requiere dar un giro radical frente al problema de los presupuestos hacia la educación. La sociedad colombiana sigue siendo una sociedad volcada a la guerra, a darle cada vez más recursos al aparato de la violencia. Si este año el presupuesto asignado a educación superó por muy poco al sector defensa, eso no significa que hayamos superado ese desbalance.

¿Cuál es el papel que deben cumplir las instituciones educativas en un escenario de postconflicto?

Para transformar esta sociedad todo depende de los esfuerzos, de cuánta voluntad y cuánta acción se tenga. No hay que olvidar que una sociedad que ha vivido tanto en la violencia y en la destrucción, va a requerir de mucho tiempo para poder recuperarse y relanzarse hacia horizontes distintos. Pero todo depende del nivel de compromiso con el que los dirigentes políticos, las élites, pero también cada ciudadano asuma esta realidad. Yo creo que sobre todo quienes han tenido la posibilidad de formarse deberían involucrarse activamente en este proceso.

Si yo fuera hoy rector de una universidad, estaría diseñando las políticas para involucrar mi institución en el proceso de paz, en el cumplimiento de los acuerdos, en el impulso de investigación útil para la paz y en el proceso de involucrar a los jóvenes para la construcción de paz. Aquí en el Congreso hemos elaborado un proyecto que es el Servicio Social Alternativo, es decir, que los jóvenes se involucren en tareas de paz. La academia, los colegios, las universidades y los centros de pensamiento pueden jugar un papel muy importante en este aspecto.

Hablemos de los desmovilizados que tendremos si se firma un acuerdo con las Farc, ¿cuál será el rol de ellas en la sociedad en términos educativos?

Yo creo que valdría la pena pensar, además de cómo se vinculan los desmovilizados en la sociedad y qué oportunidades tienen, en cómo las personas escuchan sus experiencias. En la academia se

deberían recibir para escuchar las experiencias de personas que han sido guerrilleras, que han estado en el ejército, que han sido paramilitares, etc. No se trata simplemente de verlos como personas que necesitan una capacitación, sino que podemos aprender de estas historias.

¿Cuáles son las preguntas que, desde su experiencia y perspectiva, deberían hacerse hoy los colombianos de cara al impacto del conflicto armado en la educación?

En la Comisión de Paz hemos tenido distintas discusiones sobre el tema de pedagogía, cultura y paz. Pero efectivamente necesitamos una reflexión mucho más detenida sobre cómo el sistema educativo -los procesos educativos formales e informales- está en el corazón de lo que puede ser un cambio de la sociedad colombiana de décadas de violencia, a una situación de finalización de la guerra y de la violencia armada. Debemos hacernos las preguntas correctas: ¿Cómo la educación incide en la violencia y cómo la violencia incide en la educación? ¿Qué educación hemos practicado para que el conflicto haya permanecido tanto tiempo? ¿Hay algún tipo de omisiones o de hechos que se han presentado en el sistema educativo, que han permitido que la violencia se desarrolle y se mantenga? ¿Es la indolencia del Estado por desarrollar la educación en general y por dedicar el presupuesto más a la defensa o a la seguridad, un factor que ha permitido que la guerra prime en la sociedad colombiana? ¿Cuáles son los cambios que hay que hacer para generar una educación para la paz? Se necesita una politización, en el buen sentido de la palabra, de los jóvenes, de los educadores y de los investigadores que nos permita avanzar en todos estos terrenos.

Una de las preguntas que usted formula en la respuesta anterior sugiere que la violencia que Colombia ha vivido puede ser consecuencia de la educación. ¿Podría explicar esta postura?

Cada sociedad es el resultado, en cierto sentido, de un modelo educativo. Hay modelos educativos más adaptativos, más destinados a ciertos énfasis. Yo creo que el modelo que tenemos de educación en Colombia prepara a los jóvenes, a las personas que se educan, más para una sociedad individualista y de competición, y descuida una educación más solidaria. Es por eso que necesitamos una sociedad más volcada hacia el ser humano, sus derechos, hacia el pensamiento crítico, a no dejar que los derechos se vulneren y a exigirlos como tal. Así que hay asuntos que hay que pensar, y quienes tienen que hacerlo son los que están en el sistema educativo y los dirigentes políticos que toman decisiones en el Congreso, en el poder ejecutivo, legislativo y judicial que atañen a la educación.



